RESULTANDO

Que se han llevado a cabo en tiempo y forma, hasta el momento, los trámites legalmente establecidos para dar oportuna resolución al expediente mencionado.

Que, de la tramitación de dicho expediente se desprenden circunstancias especiales, relativas no sólo a cuestiones puntuales de la tramitación, sino también a las circunstancias que corresponden a la posible sanción que llevaría aparejada.

CONSIDERANDO

Que dicha medida de ampliación de plazos se considera adecuada por las circunstancias especiales del expediente, así como que con la adopción de dicha medida no se perjudican intereses de terceros.

Vistos el art. 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como demás disposiciones aplicables, a propuesta del Instructor del expediente,

ACUERDO

Declarar la ampliación del plazo legalmente establecido para la Resolución del expediente sancionador referenciado por un período de tres meses más añadidos a los seis meses establecidos por la normativa legal aplicable.

A partir de la publicación del presente anuncio, queda abierto un período de 15 días durante el cual el interesado podrá dar vista del expediente en el Servicio de Sanidad y Bienestar Animal (C/ Gutiérrez Solana s/n), en horas hábiles y formular cuantas alegaciones considere oportunas en defensa de sus derechos.

Santander, 3 de febrero de 2006.-El consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz

Santander, 3 de marzo de 2006.-El director general de Ganadería, Manuel Quintanal Velo.

06/3955

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA**Dirección General de Ganadería**

Notificación de resolución de expediente sancionador número G-49/05.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar la resolución del procedimiento sancionador de referencia, se procede, a efectos de su conocimiento y de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la notificación por medio del presente anuncio:

Nº del expediente : G-49/05.

Datos de denunciado : Don José Antonio Saiz López.

N.I.F. : 13.911.072-M.

Domicilio: Av/ Fernández Vallejo, 1 3ºA, C.P. 39300 Torrelavega.

RESOLUCIÓN

Vistas las actuaciones correspondientes al expediente sancionador G-49/05, en base a los siguientes

HECHOS PROBADOS

1. En fecha 7 de julio de 2005, fue dictado acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador de referencia, mediante el que se imputaba a don José Antonio Saiz López, con N.I.F. nº 13.911.072-M con domicilio en C/ Fernández Vallejo nº 1, 3ºA de Torrelavega (CP 39300), la comisión de sendas infracciones a los artículos 84.15 y 84.8 de la Ley 8/2003 de 24 de abril, de Sanidad Animal, y de dos infracciones más al artículo 47.2 de la Ley de Cantabria 3/1992 de 18 de marzo de Protección de los Animales, en base a los siguientes hechos:

A) No respetar las medidas de inmovilización que le fueron comunicadas mediante oficio del Jefe del Servicio de Sanidad y Bienestar Animal, de fecha 26 de mayo de 2004, como consecuencia de la pérdida de la calificación sanitaria al no realizar la campaña de saneamiento ganadero en la totalidad de las reses de su explotación CEA ES390850000234.

B) Obstruir durante varias horas la labor inspectora el día 26 de mayo de 2005 cuando se pretendía notificarle y ejecutar la Resolución de 17 de mayo de 2005 ordenando la incautación y sacrificio de sus reses.

C) Mantener, el día 26 de mayo de 2005, tanto su estabulación como las reses allí alojadas, deficientes condiciones de higiene.

D) Por mantener el día 26 de mayo de 2005 en estado caquéctico y de abandono algunos animales de su explotación.

2. En fecha 1 de agosto de 2005 el interesado, una vez le fue notificado el acuerdo de Inicio presentó escrito de alegaciones, en el que básicamente, hizo constar lo siguiente:

- 1. Que no se le notificó inicialmente la comunicación de inmovilización y su consiguiente pérdida de la calificación sanitaria, ni tampoco en qué consistía dicha inmovilización.

- 2. Que no está de acuerdo con que se le impute en el expediente de referencia una falta de colaboración u obstrucción a la actuación administrativa el día 26 de mayo de 2005, ya que se debe tener en cuenta que, es el mismo día 26 de mayo de 2005, sin antelación previa, cuando se le notifica que se va a proceder al sacrificio de todos los animales de su explotación, por lo que éste buscó el asesoramiento pertinente sobre la procedencia y legalidad de dicha medida, requiriendo la presencia de un fedatario público.

- 3. Que no está de acuerdo con la imputación referida a que su explotación no mantiene espacios sanos y limpios; además entiende que, habiendo sido sancionado en otro procedimiento sancionador por los mismos hechos se estaría vulnerando el principio del non bis in idem.

- 4. Tampoco se muestra de acuerdo con el cargo referido a un presunto incumplimiento de las obligaciones alimenticias para con sus animales, máxime si se tiene en cuenta que los últimos análisis realizados dieron resultado negativo, lo que hace ratificar que los mismos se encontraban en perfectas condiciones.

3. En fecha 6 de noviembre de 2005 el órgano instructor, estudiadas las alegaciones del interesado, emitió propuesta de resolución en el expediente de referencia proponiendo imponer al interesado una sanción de seis mil quinientos cuarenta y dos euros con noventa y dos céntimos (6.542,92 euros).

4. En fecha 19 de diciembre de 2005 el interesado presentó escrito de alegaciones a la propuesta de resolución donde básicamente hizo constar lo siguiente:

Alegación primera:

-Que la primera imputación del expediente sancionador de referencia se refiere a la transgresión o incumplimiento de las medidas sanitarias adoptadas para la prevención, lucha, control o erradicación de enfermedades por no respetarse las medidas de inmovilización de los animales acordadas en oficio del Jefe de Sanidad y Bienestar Animal de 26 de mayo de 2004.

- Que se imputa al interesado, con este cargo, el incumplimiento de una medida accesoria dictada en procedimientos administrativos recurridos: el G-23/04 (pendiente aún de resolución judicial) y el G-49/04 (que fue recurrido en alzada por el exponente, sin que hasta la fecha se haya dictado Resolución alguna al respecto). Por tanto, nos encontramos ante una medida accesoria, que no es firme, y puede ser declarada nula de pleno derecho, con el consiguiente efecto de nulidad de todos los actos administrativos que se deriven de la misma.

- Que resulta de indudable importancia lo apuntado en

el recurso de alzada formulado y aún pendiente de resolución, frente a la resolución de sacrificio de reses de 17 de mayo de 2005.

- Que el fin o motivo de dicho oficio no era decretar una orden de inmovilización sino citarle para la realización de las pruebas de campaña de saneamiento el día 14 de junio de 2004.

- Que además se da la circunstancia de que con fecha 26 de Abril de 2004 la campaña de saneamiento en la que se había adoptado dicha medida estaba finalizada, resultando todas las reses saneadas; por tanto, la medida de inmovilización deja de tener importancia al haber subsanado el dicente las causas que determinaron la adopción de las mismas, y por tanto carecía de vigor en dicha fecha de 26 de mayo de 2004.

- Que en resumen, dicha inmovilización se dictó en procedimientos no firmes careciendo de vigor en dicha fecha y que, entrando en el análisis del incumplimiento de las medidas de inmovilización que ahora se consignan, fueron tomados como hechos probados, sin alegación alguna por esta parte, en resolución de 17 de mayo de 2005 por la que se ejecuta el sacrificio de la totalidad de las reses que conforman la explotación del dicente; y por lo que respecta al Acta A 0644 de 6 de mayo de 2005 e Informe de la Policía Local de Suances de misma fecha, entiende que ningún valor tienen ya que no se acredita que dichas reses fueran propiedad del exponente, máxime cuando así podía haber sido constatado mediante toma de nota del nº de crotal de una de las reses encontradas en la finca del Sr. Aizpiolea, haciendo constar la Policía Local de Suances en dicho acta que las reses "presuntamente" son de su titularidad.

- Que se manifiesta en dicho acta que la finca carece de cierre alguno pudiendo acceder libremente este ganado a la C/ San Pedro, vía por donde acceden vehículos y personas, no percatándose la policía del pastor eléctrico que existe en dicha linde que cierra la misma, ni constando en ningún informe o denuncia que las reses se encontraran en dicha calle.

- Que el Acta del Veterinario se limita a recoger manifestaciones efectuadas por la Policía Local sin que por tanto sean hechos de constatación directa del veterinario actuante. Además la referencia a la existencia de cuatro animales sueltos en la finca donde está situada la explotación que regentaba, no implica la vulneración o incumplimiento de la orden de inmovilización ya que en ella se indicaba que debía retirar los animales de los pastos y alojarlos en su estabulación y fincas anejas a la misma

- Que en el Acta A 0646 de 9 de mayo de 2005, en el que se dicen estar en presencia de la Policía Local de Suances, ésta no firma el acta, y en el que se hace un relato de hechos no constatados directamente por el veterinario actuante; en dicho acta se denuncia la incursión de un bovino en la finca del Sr. José Antonio Sánchez Aizpeolea y que éste manifiesta que es propiedad del interesado, pero se trata de un ternero sin identificar, pudiendo pertenecer a cualquier otro ganadero, manifestando además el veterinario actuante que no puede resolverse la actuación, no existiendo, por tanto, prueba de cargo alguna que permita concluir que dicha res es de su propiedad y, en consecuencia, que la orden de inmovilización se quebrantó.

Alegación segunda:

- Que la segunda imputación recogida en el expediente de referencia se refiere a la "obstrucción a labor inspectora el día 26 de mayo de 2005 cuando se pretendía notificarle y ejecutar la resolución de 17 de mayo de 2005 ordenando la incautación y sacrificio de las reses", no teniendo en cuenta por la instructora:

-Que la resolución de 17 de mayo de 2005 no era firme en vía administrativa y a cuya ejecución se procedió ese mismo día.

- Que parece lógico que el dicente, ante una medida de tal calibre, proceda a recabar el asesoramiento oportuno

sobre la procedencia y legalidad de dicha medida y requiera la presencia de un fedatario público.

- Que la administración debió notificar al interesado con la antelación suficiente dicha medida, dado el carácter grave y excepcional de la medida de carácter sancionador que acordó, adoptó y ejecutó, decisión que se encuentra recurrida y pendiente aún de resolución por la propia Administración.

Alegación tercera:

-Que la tercera imputación recogida en el expediente de referencia se refiere a "mantener el día 26-05-05 tanto su estabulación, como las reses allí alojadas deficientes condiciones de higiene", mostrando el dicente su disconformidad fundamentada en:

- Que consta una anterior sanción por los mismo hechos lo que implica la vulneración del principio non bis in idem

- Que no se precisa en qué consisten esas deficientes condiciones de higiene, cuáles son los animales que las presentan (que bien pudieron ser identificados en el Acta A0649) o qué partes de la estabulación presentaban las condiciones inadecuadas de higiene, tratándose por tanto de una imputación tan genérica e imprecisa que no puede deducirse de la misma la imputación de una infracción y su correspondiente sanción. En el Acta A 0649 sólo se dice por contra "Se adjuntan fotografías del estado de los animales de la explotación", sin que por parte de los veterinarios se haga constar manifestación alguna al respecto.

- Que contra la consideración de que dicha infracción está agravado por reincidencia, el interesado manifiesta lo siguiente:

Que habiéndose invocado en las primeras alegaciones el principio del non bis in idem, se responde en la Propuesta de Resolución apreciando dicha conducta como circunstancia agravante, por haber sido sancionado en firme en el expediente sancionador G-23/04 de conformidad con lo dispuesto en el art.39.5 de la Ley de Cantabria 3/1992 de 18 de marzo de Protección de los Animales, olvidando el órgano instructor que con fecha 2 de junio de 2005 se estimó parcialmente el recurso de alzada interpuesto contra dicho expediente, no proponiendo frente al dicente sanción alguna por infracción al art. 47.2 de la Ley de Cantabria 3/1992, resultando, por tanto, dicha circunstancia de agravación, nula de pleno derecho.

5. De las Actas de Inspección A 0644 y A 0646 levantadas los días 6 de mayo de 2005 y 9 de mayo de 2005 respectivamente por los Servicios Veterinarios Oficiales y del informe de la Policía Local de Suances de fecha 6 de mayo de 2005 queda acreditado que don José Antonio Saiz López, con D.N.I. 13.911.072-M no ha respetado las medidas de inmovilización que le fueron comunicadas mediante oficio del Jefe del Servicio de Sanidad y Bienestar Animal de fecha 26 de mayo de 2004, como consecuencia de la pérdida de la calificación sanitaria de su explotación, al no realizar la campaña de saneamiento ganadero en la totalidad de las reses de su explotación CEA ES39085000234.

Del Acta de Inspección A 0649 levantada el día 26 de mayo de 2005 por los Servicios Veterinarios Oficiales acompañada de su anexo fotográfico realizado por la Policía Local de Suances, así como de la Denuncia del Seprona de Torrelavega de fecha: 28 de mayo de 2005 queda igualmente acreditado que don José Antonio Saiz López, con D.N.I. 13.911.072-M obstruyó, el día 26 de mayo de 2005, durante varias horas la labor inspectora cuando se pretendía notificarle y ejecutar la Resolución del Director General de Ganadería de 17 de mayo de 2005 ordenando la incautación y sacrificio de sus reses.

Del Acta de Inspección A 0649 levantada el día 26 de mayo de 2005 por los Servicios Veterinarios Oficiales acompañada de su anexo fotográfico realizado por la Policía Local de Suances, así como de la Denuncia del Seprona de Torrelavega de 28 de mayo de 2005 queda

igualmente acreditado que don José Antonio Saiz López, con D.N.I. 13.911.072-M mantenía, el día 26 de mayo de 2005, tanto su estabulación, como las reses allí alojadas en deficientes condiciones de higiene.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca, es el órgano competente para acordar la resolución del presente procedimiento sancionador, en virtud de las atribuciones que le confieren la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria; Real Decreto de Transferencias 3114/1982, de 24 de julio; Decreto 18/2000, de 17 de marzo, de Estructura Orgánica de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

II.- Estudiadas las alegaciones presentadas por el interesado al Acuerdo de Inicio se consideró procedente desestimar la primera, segunda y tercera, de acuerdo con la siguiente argumentación jurídica:

- Queda desestimada la 1ª alegación referida a que no se le notificó inicialmente la comunicación de inmovilización y su consiguiente pérdida de la calificación sanitaria ya que:

1º El oficio del Jefe de Servicio de Sanidad y Bienestar Animal de fecha 26 de mayo de 2004 en el que se le notificaba que el día 14 de junio de 2004 a las 9 horas se procedería a realizar las pruebas sanitarias de campaña a la totalidad de su establo fue recogido y firmado por el propio destinatario el día 19 de junio de 2004. En dicho oficio se le notificaba, además, que debía poner todos los animales de su explotación a disposición de los veterinarios actuantes, recordándole que la negativa a permitir o facilitar el saneamiento de sus animales daría lugar a la incoación de expediente administrativo sancionador, comunicándole, asimismo, que hasta la realización de dichas pruebas, quedaba suspendida la calificación sanitaria de su explotación. Finalmente se le recordaba en dicho oficio que su establo quedaba sujeto a inmovilización, de acuerdo con el art. 9 de la Orden de 12 de julio de 2001 sobre Normas de Control Sanitario y desarrollo de Campañas de Saneamiento, y que, en consecuencia, debía proceder a la retirada de los animales de los pastos y alojarlos en al estabulación y fincas anejas a la misma, apercibiéndole de que el incumplimiento de las medidas de inmovilización llevaría aparejada la incoación del correspondiente expediente sancionador.

2º En Acta de 9 de junio de 2004 se refleja que se notificó en su propia explotación CEA ES39085000234 y en presencia de su madre, doña Mª Antonia López López, que dicha explotación debía pasar la campaña para el 14 de junio de 2004, negándose ésta a firmar el Acta.

3º Finalmente la resolución del Director General de Ganadería de 17 de mayo de 2005 ordenando la incautación y sacrificio in situ de la totalidad de sus reses fue recogida por el interesado a las 11 horas del día 26 de mayo de 2005

- Queda desestimada igualmente la 2ª alegación referida a su negativa a reconocer una falta de colaboración u obstrucción a la actuación administrativa el día 26 de mayo de 2005, ya que ha quedado perfectamente acreditada dicha actitud obstruccionista manifestada en actos, tales, como colocar el coche impidiendo el acceso a su explotación o introducirse en el mismo para impedir su retirada por la grúa. Retirada que sólo fue posible una vez se personaron efectivos de la policía judicial que lo convencieron para que depusiera su actitud obstruccionista, retrasando en más de dos horas toda la actuación administrativa.

- Queda desestimada finalmente la 3ª alegación ya que, de las Actas de Inspección A 0649 levantados el día 26 de mayo de 2005 por los Servicios Veterinarios Oficiales

acompañada del reportaje fotográfico realizado por la Policía Local de Suances, (fotos 12:48:32, 12:48:38, 12:49:38, 12:49:42, 12:50:46, 12:51:17 17:10:28, 17:10:40 así como de la Denuncia del Seprona de Torrelavega de fecha: 28 de mayo de 2005 queda acreditado las deficientes condiciones de higiene en que se encontraba tanto su explotación, como muchas de sus reses.

- Tampoco se vulnera el principio de non bis in idem por el hecho de abrirse al incoado un nuevo expediente por incumplir las condiciones de higiene de su explotación, no exonerándolo el hecho de haber sido sancionado en firme por estos mismos hechos en un procedimiento sancionador anterior G-23/04 (se decía por error cuando en realidad se debió decir I-1294/03); antes al contrario, dicha responsabilidad quedaría agravada precisamente por su reincidencia

Procede, en cambio, estimar parcialmente la 4ª alegación presentada por el incoado, esto es, aquella en la que muestra su disconformidad con la imputación de incumplimiento de las obligaciones alimenticias de sus animales, ya que, a juicio de esta instructora, no queda suficientemente probado que algunas reses se encontraran en estado caquéctico; si bien no refuerza la tesis sostenida por el incoado el hecho de que dichas reses pasaran la campaña de saneamiento con resultado negativo, ya que dichas pruebas se practican para la detección de diferentes enfermedades animales objeto de erradicación, no pudiendo deducirse de dichos controles el estado alimentario de las mismas, puesto que éstas no persiguen dicho objetivo.

Estudiadas las alegaciones presentadas por el interesado a la propuesta de resolución se determina lo siguiente:

- Queda desestimada la primera alegación donde el interesado manifiesta que la orden de inmovilización a la que está sometida su explotación es una medida accesoria que no es firme y puede ser declarada nula de pleno derecho, bien a través de diferentes recursos de alzada, bien a través de resoluciones judiciales que pudieran declarar dicha nulidad.

Sin embargo, dicha manifestación es improcedente dado que la interposición de cualquier recuso no suspende la ejecución del acto impugnado, tal y como recoge el artículo 111 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por otro lado, el interesado falta a la verdad cuando manifiesta que su explotación CEA ES39085000234 "superó la campaña de saneamiento de 26 de abril de 2004, encontrándose en ese momento todas sus reses saneadas", cuando lo cierto es que de la base de datos oficial SICMA de la Consejería de Ganadería quedó acreditado que, al menos nueve reses que pasaron la anterior campaña de saneamiento en dicha explotación en fecha 26 de septiembre de 2003 no lo hicieron el 26 de abril de 2004. En consecuencia, al no someter la totalidad del censo de su explotación ganadera a dicha Campaña se infringió el art. 84.17 de la Ley 8/2003 de 24 de abril de Sanidad Animal Asimismo, lo cual, a su vez, dio lugar a la apertura del expediente sancionador G-49/04, ya firme en vía administrativa tras el acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria de 20 de diciembre de 2005 desestimando el recurso de alzada interpuesto.

Respecto de la afirmación referida a que la inmovilización se dictó en procedimientos no firmes careciendo de vigor en dicha fecha y cuyos hechos fueron tomados como probados sin alegación alguna por parte del interesado, nos remitimos tanto a lo dispuesto en el mencionado artículo 111 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, como a lo recogido en la resolución del Director General de Ganadería de 17 de mayo de 2005 donde se ordenó la incautación y sacrificio de las reses del interesado, donde quedó constatado que no existía por parte del interesado el más mínimo deber de cuidado que garantizara el cumplimiento de la citada medida de inmovilización, de lo cual

se desprendía la existencia de un riesgo cierto y grave para la sanidad animal.

Seguidamente argumenta el interesado que ni en el Acta A 0644 de 6 de mayo de 2005, ni en el Informe de la Policía de la misma fecha, se refleja el nº de identificación de la única res que portaba crotales de las dos que se encontraban en ese momento, en la explotación del Sr. Aizpeolea (colindante del interesado) al objeto de verificar si efectivamente dicho crotal se correspondía o no, con reses censadas en la explotación de éste.

Sin embargo, tal y como se reflejó en la Propuesta de Resolución del expediente de referencia, tanto del Acta A 0644 como del Informe de la Policía Local de la misma fecha queda acreditado el incumplimiento de dicha inmovilización ya que:

- En el Acta A 0644 se recoge que la finca de don José Antonio Sáiz López "no posee ningún tipo de cierre que evite la salida de estos animales a la carretera"

- En el Informe de la Policía Local: se recoge "que dicha finca carece de cierre alguno, pudiendo acceder libremente este ganado a la C/ San Pedro, vía por la cual transitan habitualmente tanto vehículos como personas".

- En el reportaje fotográfico anexo de la Policía Local se aprecia además el deficiente cerrado de su explotación ya que la fotografía 6 de mayo de 2005 11:49:19 muestra una res en el linde de ambas explotaciones, esto es, la del interesado y la de su vecino colindante Sr. Sánchez Aizpeolea CEA ES390850000229, junto a un muro abierto permitiéndose el paso de reses desde una explotación a la otra;

Las tres fotos de dicho reportaje: 6 de mayo de 2005 11:49:19, 11:49:26 y 11:50:13 tomadas desde la finca del Sr. Sánchez Aizpeolea CEA ES390850000229 muestran reses de la misma tipología que las incautadas en la explotación del interesado el día 26 de mayo de 2005, descartándose que se trate de reses del propio denunciante Sr. Sánchez Aizpeolea, cuya cabaña está formada por vacas de raza frisona, según consta en los registros oficiales de la Consejería de Ganadería.

Queda desestimada, también, la alegación del interesado referida a que dicha finca contaba con pastor eléctrico ya que de las Actas e Informes antes mencionados queda acreditado lo contrario. Tampoco desvirtúa dicha imputación el hecho de que, afortunadamente, no se tenga constancia de que las reses hayan accedido a la carretera.

No es exacta tampoco la alegación referida a que el inspector Facultativo Veterinario recoge manifestaciones de la Policía Local sin constatarlos directamente ya que el mencionado Acta A0644 está levantado a las 12 horas del día 6 de mayo de 2005 en Hinojedo y está firmado por don Luis Sáez González, Facultativo Veterinario.

Por lo que se refiere al Acta A 0646 de 9 de mayo de 2005 donde se denuncia la presencia de un ternero sin identificar en la explotación del Sr. Sánchez Aizpeolea y su posterior ubicación en la explotación del interesado, éste alega que el Facultativo se refiere a hechos no constatados directamente por el veterinario actuante; sin embargo de la lectura de dicho Acta A 0646 se desprende lo contrario, esto es, que el veterinario actuante se personó en la explotación del Sr. Sánchez Aizpeolea, previa denuncia de éste último, después de las once horas del día 9 de mayo de 2005 y constató la presencia del ternero sin crotalar en su finca, y que aproximadamente dos horas después (hacia las 13,15 horas) se hace constar que "cuando volvemos el ternero ha vuelto a las instalaciones del supuesto propietario" (don José Antonio Sáiz López) de donde se desprende un nuevo incumplimiento de la orden de inmovilización, ya que con independencia, de que sea o no posible constatar fehacientemente la titularidad de esa res, es un hecho probado que la misma transitó entre ambas fincas, quebrantando la orden de inmovilización que restringe tanto movimientos de entrada como de salida de su explotación.

Queda igualmente desestimada la segunda alegación en la que el interesado no reconoce su actitud obstruccionista el día 26 de mayo de 2005, no atenuando la conducta de éste, ni la circunstancia de que dicha medida esté recurrida, ni mucho menos que la misma, dado su carácter grave y sancionador, debió notificarse al interesado con la antelación suficiente. Antes al contrario, tal y como se recoge en los Fundamentos de derecho de la resolución de incautación y sacrificio de sus reses de 17 de mayo de 2005, al apreciarse riesgo de propagación de enfermedad animal y su posible incidencia sobre la salud pública o la sanidad animal, se debe actuar con la mayor rapidez y eficacia posibles, evitando que un conocimiento previo de la misma dé al traste con toda la actuación proyectada, tal y como contempla el artículo 77 de la Ley 8/2003 de sanidad animal que dice "las autoridades competentes podrán adoptar de forma motivada por razones de urgencia o necesidad, medidas provisionales de carácter cautelar, si de las actuaciones preliminares realizadas en las actuaciones de inspección o control se dedujera la existencia de un riesgo inmediato de aparición o propagación de una enfermedad epizootica o la existencia de un riesgo cierto y grave para la salud pública o animal".

En el art. 77.2 de la misma Ley se establece que las medidas cautelares podrán ser cualquiera de las relacionadas en el art. 8.1 cuyo epígrafe "d" contempla: "la incautación y, en su caso, sacrificio de aquellos animales que no cumplan con la normativa sanitaria o de identificación vigente".

Queda desestimada íntegramente la tercera alegación donde el interesado niega que las reses allí alojadas presentaran deficientes condiciones de higiene alegando que no se precisa ni los animales ni las partes de la estabulación afectadas por dicha falta de higiene, ya que, tal y como se le contestó en fase de propuesta de resolución, de las Actas de Inspección A 0649 levantados el día 26 de mayo de 2005 por los Servicios Veterinarios Oficiales acompañada del reportaje fotográfico realizado por la Policía Local de Suances, (fotos 12:48:32, 12:48:38, 12:49:38, 12:49:42, 12:50:46, 12:51:17 17:10:28, 17:10:40 así como de la Denuncia del Seprona de Torrelavega de fecha: 28 de mayo de 2005 queda acreditado las deficientes condiciones de higiene en que se encontraba tanto su explotación, como muchas de sus reses. Las fotos mencionadas ponen de manifiesto que tanto el suelo, como las paredes y el utillaje de dicha explotación, (incluso las reses) se encuentra en un estado deplorable.

Tampoco se vulnera, tal y como se contestó al interesado en fase de Propuesta de Resolución, el principio de non bis in idem por el hecho de abrirse al interesado un nuevo expediente por incumplir las condiciones de higiene de su explotación, no exonerándolo el hecho de haber sido sancionado en firme por estos mismos hechos en un procedimiento sancionador anterior I-1294/03 (y no en el expediente G-23/04 como erróneamente se señaló en la propuesta de resolución); antes al contrario, dicha responsabilidad quedaría agravada si mediase reincidencia.

Queda igualmente desestimada la tercera alegación en la pretensión del interesado de no reconocer la existencia de reincidencia en el presente expediente ya que desde la fecha en que el interesado fue sancionado en firme por idénticos hechos (8 de noviembre de 2004) a través del expediente sancionador I-294/03 hasta el día 26 de mayo de 2005 (día de la actuación en la explotación del interesado) no ha transcurrido más del año exigido en el artículo 39.6 de la Ley de Cantabria 3/1992 de 18 de marzo de protección de los animales para apreciarse dicha reincidencia.

- III).- Los indicados hechos probados responden a la siguiente infracción:

- Infracción grave, de conformidad con lo establecido en el art. 84.15 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, por el incumplimiento o transgresión de las medidas sanitarias adoptadas por la Administración para la prevención, lucha, control o erradicación de enfermedades.

Y ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1.b) de la mencionada Ley 8/2003 de 24 de abril, que establece que "Corresponde a los titulares de las explotaciones: aplicar las medidas obligatorias que se establezcan para luchar, controlar o erradicar las enfermedades de los animales, o consentir su aplicación, así como poner los medios necesarios para que se puedan realizar las citadas medidas con las debidas garantías de seguridad tanto para los animales objeto de éstas como para el personal que las ejecute"; desarrollado por Orden GAN/6/2005, de 25 de enero de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca por la que se establecen normas de control sanitario y de desarrollo de las Campañas de Saneamiento de la Cabaña Bovina, Ovina y Caprina que establece en su artículo 7.1.d) "Serán objeto de medidas de inmovilización las explotaciones que incumplan la normativa sanitaria vigente en materia de campaña de saneamiento y movimiento de animales", movimientos recogidos en Actas A0644 y A0646, los días 6 de mayo de 2005 y 9 de mayo de 2005, respectivamente, donde se acredita el incumplimiento de la inmovilización.

- Dicha infracción es sancionable con multa de 3.001 a 60.000 euros, según se establece en el art. 88 de la mencionada Ley.

- Infracción grave, de conformidad con lo establecido en el art. 84.8 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, por la oposición, obstrucción o falta de colaboración a la actuación inspectora y de control de las Administraciones públicas, cuando impida o dificulte gravemente su realización.

Y ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78.1, art 79.1.g) y art. 81.1.d) de la Ley 8/2003 de 24 de abril de sanidad animal cuando establecen respectivamente que

"El personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de las funciones inspectoras recogidas en esta Ley, tendrá el carácter de agente de la autoridad" (art 78.1)

"Los funcionarios que desarrollen las funciones de inspección estarán autorizados para: incautar y, en su caso, ordenar el sacrificio, en el supuesto de aquellos animales sospechosos que no cumplan con la normativa sanitaria o de identificación vigente" (art. 79.1.g)

"Las personas físicas o jurídicas a quienes se practique una inspección estarán obligadas a consentir y colaborar en al realización de la inspección" (art 81.1.d)

- Dicha infracción es sancionable con multa de 3.001 a 60.000 euros, según se establece en el art. 88 de la mencionada Ley.

- Infracción grave, de conformidad con lo establecido en el art. 47.2 de la Ley de Cantabria 3/1992, de 18 de marzo, de protección de los animales, por el incumplimiento de lo establecido en su artículo 24, apartado d): "Establecer espacios y ambientes sanos y limpios en los lugares de alojamiento, evitando el hacinamiento y los ambientes deteriorados y manteniendo las adecuadas condiciones higiénicas".

Y ello de conformidad asimismo con lo supuesto en el art. 2 de la mencionada Ley de Cantabria 3/1992 de 18 de marzo que establece en su artículo 2 que "El poseedor de una animal tendrá la obligación de mantenerlo en buenas condiciones higiénicas y sanitarias".

- Dicha infracción es sancionable con multa de 270,46 a 601.01 euros, según se establece en el art. 39 de la mencionada Ley.

- Si bien en el Acuerdo de inicio del expediente de referencia se imputó al interesado la comisión de otra Infracción grave, de conformidad con lo establecido en el art. 47.2 de la Ley de Cantabria 3/1992, de 18 de marzo, de protección de los animales, por el incumplimiento de lo establecido en su artículo 24, apartado e): "Procurar a dichos animales, aún en los casos de explotaciones en régimen extensivo, una alimentación suficiente", un análisis pormenorizado del expediente, llevó a entender ya en fase de Propuesta de Resolución, más ajustado a derecho, tal y como se ha refle-

jado en el punto II, exonerarle de dicha imputación por no quedar suficientemente acreditado tal cargo.

IV.- De las mencionadas infracciones, se considera responsable a don José Antonio Saiz López, con NIF 13.911.072-M en base tanto, al oficio del Jefe del Servicio de Sanidad y Bienestar Animal de fecha 26 de mayo de 2004, como consecuencia de la pérdida de la calificación sanitaria de su explotación, al no realizar la campaña de saneamiento ganadero en la totalidad de las reses de su explotación CEA ES390850000234, como a las Actas de Inspección A 0644 y A 0646 levantadas los días 6 de mayo de 2005 y 9 de mayo de 2005 respectivamente por los Servicios Veterinarios Oficiales y del informe de la Policía Local de Suances de fecha 6 de mayo de 2005, y del Acta de Inspección A 0649 levantada el día 26 de mayo de 2005 por los Servicios Veterinarios Oficiales, acompañada de su anexo fotográfico realizado por la Policía Local de Suances, así como de la Denuncia del Seprona de Torrelavega de idéntica fecha: 28 de mayo de 2005, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

V.- Se aprecian como circunstancias agravantes en el presente expediente la reincidencia en el incumplimiento de lo establecido en el art. 24.e) de la Ley de Cantabria 3/1992, de 18 de marzo, de protección de los animales, ya que el interesado fue sancionado en firme por idéntica conducta el día 8 de noviembre de 2004 a través del expediente sancionador I-1294/03 (no del expediente sancionador G-23/04 como erróneamente se señaló en la Propuesta de Resolución), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.6 de la Ley de Cantabria 3/1992 de 18 de marzo de Protección de los Animales).

VI.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, para la infracción graves reguladas por dicha norma puede corresponderles la sanción de 3.001 a 60.000 euros de multa.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de Cantabria 3/1992 de 18 de marzo de Protección de los Animales, para la infracción graves reguladas por dicha norma puede corresponderles la sanción de 270,46 euros a 601,01 euros de multa.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación

RESUELVO

Imponer a don José Antonio Saiz López, la sanción de seis mil quinientos cuarenta y dos euros con noventa y dos céntimos (6.542,92 euros) de multa, de acuerdo con el siguiente desglose:

- 3.001 euros de sanción por la comisión de la infracción recogida en el art. 84.15 de la Ley 8/2003 de 24 de abril, de Sanidad Animal.

- 3.001 de sanción por la comisión de la infracción recogida en el art. 84.8 de la Ley 8/2003 de 24 de abril, de Sanidad Animal.

- 540,92 euros de sanción por la comisión de la infracción recogida en el art. 47.2 de la Ley de Cantabria 3/1992 de 18 de marzo de Protección de los Animales en relación con el art. 24.d de la misma Ley).

Acompaña a esta Resolución modelo 046.

Frente a dicha resolución que no agota la vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de Cantabria, en el plazo máximo de un mes, a contar desde la recepción de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santander, 27 de diciembre de 2005.—El consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.

Santander, 10 de febrero de 2006.—El director general de Ganadería, Manuel Quintanal Velo.